



LA IZQUIERDA COLOMBIANA, UN CASO PARTICULAR EN EL ESCENARIO LATINOAMERICANO

Jeisson Oswaldo Martínez Leguízamo¹

Licenciado en Filosofía, Máster en Sociología Aplicada. Doctorando en el programa “Sociedad, Desarrollo y Relaciones Laborales” de la Universidad de Murcia, España.

Resumen: En los últimos 25 años en el panorama político de Latinoamérica se pueden apreciar dos fenómenos evidentes. Primero, la crisis del modelo neoliberal instaurado en el continente a partir del Consenso de Washington y, segundo, la respuesta popular que condujo al ascenso de movimientos pertenecientes a un amplio espectro de la izquierda. Colombia, a pesar de mantener una activa movilización social, no ha logrado sumarse a esta tendencia regional. La intervención permanente de los EE.UU., la violencia usada como instrumento político por parte de las élites colombianas y la dispersión de la izquierda aparecen entre las principales explicaciones de este hecho. Como respuesta a la violencia estatal y ante el cierre de los espacios democráticos, una parte de la izquierda se alzó en armas impugnando la legitimidad del régimen, mientras que otra se mantuvo dentro de la institucionalidad a pesar de los riesgos que ello conllevaba. El Estado, decidido a terminar por la fuerza con el alzamiento armado, adoptó una tendencia militarista encaminada a la persecución de las guerrillas, pero que se extendió al conjunto de la izquierda democrática y del movimiento social. Sin embargo, los Diálogos de Paz han abierto la posibilidad de superar la confrontación. Ante la eventual firma de un acuerdo de paz, vuelve a cobrar vigencia el debate sobre la unidad de la izquierda, pero esta vez con un elemento adicional: la posibilidad de que los movimientos políticos que resulten del acuerdo puedan sumarse a la tan anhelada convergencia.

Abstract: For the last 25 years two clear phenomena can be appreciated in the Latin American political context. Firstly, the crisis of the neoliberal approach, installed in the

¹ jeisson.martinez@um.es



continent since the Washington Consensus, and secondly the popular response which lead to the rising of some movements belonging to a wide left-wing spectrum. Colombia, despite the fact of keeping an active social mobilisation, has not managed to join this regional tendency. The permanent USA intervention, the violence used as a political instrument by the Colombian elites, and the left-wing dispersion seem to be among the main explanations for this situation. As a response to the state violence and the closing of the democratic spaces, a part of the left-wing took up arms refuting the regime legitimacy. Meanwhile, other part kept within the institutional framework, in spite of the risks. The State, which was determined to end the armed uprising by force, adopted a militaristic tendency aiming to the guerrilla persecution, but which was extended to the whole democratic left-wing and social movement. However, the Peace Talks have opened the possibility of getting over the confrontation. Before the possible signature of a peace agreement, the debate on the left-wing unity is back in force, but this time with an additional element: the possibility for the political movements resulting from the agreement to be able to join the dreamed alignment.

Palabras clave: Izquierda, Colombia, Latinoamérica, EE.UU., neoliberalismo, terrorismo de Estado, insurgencia, injerencia, Diálogos de paz, unidad.

Key workds: Left-wing, Colombia, Latin America, USA, neoliberalism, State terrorism, insurgence, interference, Peace Talks, unity.



ÍNDICE

1.	Abreviaturas	4
2.	La izquierda latinoamericana	5
3.	Colombia: injerencia extranjera y violencia política	7
4.	El conflicto y las diversas expresiones de la izquierda	9
5.	La laboriosa búsqueda de la unidad	11
6.	La necesidad de la paz y de la construcción del Frente Amplio.....	14
7.	Conclusiones	16
8.	Bibliografía	18



1. ABREVIATURAS

ANAPO Alianza Nacional Popular
AP Alianza País
BM Banco Mundial
BID Banco Interamericano de Desarrollo
CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CIS Confederación Sindical Internacional
CRS Corriente de Renovación Socialista
CSTC Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia
CUT Central Unitaria de Trabajadores
ELN Ejército de Liberación Nacional
EPL Ejército Popular de Liberación Nacional
FA Frente Amplio-Uruguay
FARC-EP Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ejército del Pueblo
FMI Fondo Monetario Internacional
FpV Frente para la Victoria-Argentina
MAC Movimiento Amplio Colombiano
MAS Movimiento al Socialismo-Bolivia
MOIR Movimiento Obrero Independiente Revolucionario
M19 Movimiento 19 de Abril
UNO Unión Nacional de Oposición
OIT Organización Internacional del Trabajo
PCC Partido Comunista Colombiano
PDA Polo Democrático Alternativo
PDI Polo Democrático Independiente
PRT Partido Revolucionario de los Trabajadores
PSUV Partido Socialista Unificado de Venezuela
PT Partido de los Trabajadores de Brasil
UP Unión Patriótica



2. LA IZQUIERDA LATINOAMERICANA

El ascenso al poder de Hugo Chávez en 1998 marcó el comienzo de un nuevo ciclo político y social para Latinoamérica. Se trataba de la llegada a las instituciones de uno de los diversos movimientos políticos y sociales que habían irrumpido en el panorama democrático de la región como respuesta al fracaso de la doctrina neoliberal instalada en el marco del Consenso de Washington a partir de 1989. La aplicación de las medidas de liberalización económica diseñadas por los poderes internacionales (FMI, BM, BID y Departamento del Tesoro de los Estados Unidos) fue posible gracias al camino allanado por las dictaduras militares de los años setenta que arremetieron contra quienes representaban su principal obstáculo: el movimiento sindical y los movimientos sociales en general.

El proyecto hegemónico neoliberal, lejos de contribuir al desarrollo de la región, provocó recesiones financieras generalizadas y una agudización de las contradicciones entre las clases. Fue en este contexto en el que fuerzas de izquierda no solo se reorganizaron para resistir la imposición neoliberal, sino que avanzaron en el diseño de programas alternativos de gobierno que más tarde se convertirían en nuevos proyectos de paísⁱ.

Al PSUV comandado por Hugo Chávez en Venezuela le siguió el triunfo de Lula Da Silva en Brasil en 2003 y el ascenso del Frente Amplio (FA) en Uruguay en 2004ⁱⁱ. Por su parte, Argentina transitaría de las luchas por el territorio del Movimiento Piquetero y por la memoria histórica de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo a la conformación en 2003 del Frente para la Victoria (FpV). Este movimiento, aglutinando bajo la figura de los Kirchner a un amplio espectro de formaciones peronistas, de centro izquierda hasta corrientes socialistas, comunistas y humanistas, logró entre otras cosas cancelar la deuda con el FMI, uno de los principales factores de sustento de la economía neoliberal.

Ecuador fue otro de los escenarios donde se experimentaron las medidas neoliberales, especialmente desde el gobierno de Sixto Durán Ballen (1992-1996). Las pautas de desregularización de la economía dictadas por las instituciones financieras globales desencadenaron una profunda crisis financiera que tuvo su cúspide en el denominado Feriado Bancario de 1999 y la dolarización de la economía al año siguiente. Como en los casos anteriores no tardó en surgir un movimiento de respuesta ciudadana a los abusos



neoliberales. Se constituyó a partir del año 2000 bajo el nombre de Alianza País aglutinando a otras formaciones como Iniciativa Ciudadana, Movimiento PAIS, Acción Democrática Nacional (ADN), Jubileo 2002 y Movimiento Alfarista Bolivariano. Contó también con el apoyo de intelectuales de izquierda, defensores de derechos humanos y múltiples grupos provinciales. Su primera victoria electoral la lograría en el año 2006 bajo la batuta de Rafael Correa y con un programa decididamente rupturista que incluía la propuesta de una Reforma Constitucional. El proceso comenzó con la convocatoria de un referendo en el que el pueblo ecuatoriano ratificó con abrumadora mayoría de 81,72% la necesidad de redactar la nueva carta. La Asamblea Nacional Constituyente se realizó al año siguiente y en ella el Movimiento Alianza País obtuvo el 70% de los escaños. Una vez culminado el diseño de las nuevas reglas democráticas, se convocó por tercera ocasión al pueblo ecuatoriano, que esta vez ratificó el proceso con un 63,93% de los votos. La nueva carta le dio la facultad al gobierno ecuatoriano de auditar la deuda externa pactada entre sus predecesores y la banca internacional, renegociar los contratos petroleros con las transnacionales y recuperar la soberanía del país con acciones tan simbólicas como el cierre de la Base Militar de Manta, cedida a EE.UU. en 1998 por Jamil Mahuad.

En Bolivia, las reformas neoliberales condujeron a la sustitución de las grandes empresas por pequeñas y medianas fábricas, lo que conllevó a la disolución de los núcleos obreros y la consiguiente fractura de la tradicional organización sindical. Pero paradójicamente la fragmentación de las fuerzas obreras, que por años habían sido las mediadoras legítimas entre el estado y la sociedad, posibilitó el surgimiento de otras formas de unificación social y acción colectiva a partir de reivindicaciones concretas, como la defensa del agua, los servicios públicos y los derechos de los indígenas (Linares, 2001). Las demandas fueron asumidas por organizaciones territoriales como juntas vecinales, asociaciones de campesinos y el movimiento cocalero, compuesto en esencia por sectores indígenas. En 1997, todas estas expresiones confluyeron en el Movimiento al Socialismo (MAS), que aunque ya existía desde 1987 fue refundado bajo la dirección de Evo Morales Aima, líder indígena que procedía de la Confederación de Trabajadores del Trópico Cochabambino. En 2005, Morales se alzó con el honor de ser el primer mandatario indígena de la historia de Bolivia, logrando el reconocimiento para un sector



de población históricamente subordinado a pesar de representar el 62% del total nacional de población. El apoyo de estas mayorías le permitió ganar otras dos contiendas presidenciales, en 2009 con el 64,22 % y repetir en 2014 con el 61,36 % de los votos.

En Nicaragua y El Salvador, movimientos de izquierda obtuvieron el gobierno por canales democráticos gracias a la reconversión en partidos políticos de las fuerzas insurgentes que habían resistido a los gobiernos militaresⁱⁱⁱ. El Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional (FMLN) llevó en 2009 por primera vez al poder a la izquierda salvadoreña liderada por Mauricio Funes. Cinco años después, repetiría al mando de Salvador Sánchez Cerén. En el país vecino el proceso estuvo a cargo del Frente Sandinista por la Liberación Nacional (FSLN), fundado como fuerza insurgente en 1961 con el propósito de combatir la dictadura Somocista (1934-1979). Como movimiento armado logró expulsar al dictador en 1979 e instalar un gobierno de corte popular que fue rápidamente desestabilizado por fuerzas contrarrevolucionarias respaldadas abiertamente por EE.UU. Tras un periodo en la oposición y luego de una transformación interna, pudo retornar al poder en 2006 de la mano de Daniel Ortega, una de las figuras más emblemáticas de la historia del movimiento.

Otros proyectos de inspiración popular, como los de Honduras en 2009 y Paraguay en 2012, fueron interrumpidos por medio de una combinación de represión militar y manipulación del aparataje legal. Ambos sucesos terminaron con la destitución de los gobiernos democráticos de Manuel Zelaya y Fernando Lugo, respectivamente^{iv}. Aunque la estrategia de desestabilización preserva los mismos objetivos, que son fundamentalmente impedir el ascenso de proyectos políticos que se aparten de la hegemonía euro-norteamericana, ha introducido nuevos mecanismos que suponen un menor coste en términos económicos y de imagen comparados con los clásicos golpes militares^v.

3. COLOMBIA: INJERENCIA EXTRANJERA Y VIOLENCIA POLÍTICA

Colombia no ha logrado sumarse a la tendencia generalizada de gobiernos de izquierda en América Latina. Esto se debe no tanto a la ausencia de fuerzas sociales que hayan trabajado en este propósito, sino más bien a que el peso ejercido por los defensores del *statu quo* por ahora ha sido significativamente mayor.



En este sentido uno de los elementos decisivos ha sido la política de intervención que ha mantenido EE.UU. en el continente, con un capítulo especial para Colombia. Su expresión más reciente y genuina fue el acuerdo militar y económico firmado por los gobiernos de los dos países en el año 1999, denominado Plan Colombia, por medio del cual EE.UU. transfiere tecnología militar a Colombia so pretexto de colaborar en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo^{vi}. La puesta en marcha de este programa bélico fue una de las fichas claves jugadas por EE.UU. en su intento de no perder el control de la región en el momento en el que las recetas neoliberales ya no gozaban de credibilidad y los movimientos populares empezaban a revitalizarse. La preocupación por mantener su influencia en el plano militar se explica en primer lugar por la necesidad de neutralizar a los sectores sociales colombianos, evitando que pudieran ser contagiados por la tendencia regional, y en segunda instancia por la pretensión de convertir a Colombia en un balcón desde el cual poder obstaculizar el avance de otros gobiernos de izquierda en la región.

Durante el periodo de aplicación del Plan Colombia, las violaciones a los derechos humanos se multiplicaron teniendo como principal objetivo a sindicalistas, estudiantes, líderes comunitarios y miembros de la izquierda social y política^{vii}. La violencia por parte del estado colombiano se constituyó en su principal herramienta política y en un factor determinante en la evolución de la izquierda colombiana. Basta recordar el caso del movimiento político Unión Patriótica (UP), surgido en 1985 en el marco de los Diálogos de Paz entre el gobierno de Belasario Betancur y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP)^{viii}. La UP fue pensada como una plataforma política legal y del todo institucional que acogiera a sectores muy diversos de la izquierda colombiana que planteaban una alternativa al bipartidismo imperante en el país. Durante su corta existencia, la sociedad colombiana observó cómo pasó de ser un partido exitoso a convertirse en una fuerza política exterminada, convirtiéndose en el mayor caso judicial colectivo en la historia del sistema interamericano de justicia (Santiago, 2010).^{ix}

La cadena de hechos violentos cometidos contra la UP fue respaldada por medio de un discurso justificatorio que alcanzó amplia difusión social; las acciones fueron legitimadas



por medio de declaraciones públicas de funcionarios estatales de todos los niveles, oficiales de alto rango de la Fuerza Pública, líderes políticos y empresariales, jefes paramilitares, miembros de la jerarquía eclesiástica, directores de grandes medios de comunicación y reconocidos académicos. Las denuncias sobre nuevas amenazas fueron banalizadas por las autoridades, calificándolas como una artimaña publicitaria de los líderes de izquierda para disimular la decadencia de su proyecto ideológico como consecuencia de la caída del Muro de Berlín (Cepeda, 2006).

4. EL CONFLICTO Y LAS DIVERSAS EXPRESIONES DE LA IZQUIERDA

Este uso sistemático de la violencia implementado por el estado colombiano con el favor militar de EE.UU. provocó desde la década del sesenta la división de la izquierda colombiana en dos sectores; uno que se mantuvo ejerciendo la participación política dentro de la institucionalidad, asumiendo los riesgos que ello conllevaba, y otro que se alzó en armas impugnando la legitimidad de un régimen que consideraba antidemocrático. Las primeras experiencias de resistencia armada del siglo XX se produjeron como respuesta a la represión estatal contra la movilización indígena realizada entre 1914 y 1918 en el Departamento del Cauca. El conflicto se desencadenó tras la decisión del general Reyes de abolir los resguardos, figuras creadas desde la segunda mitad del siglo XVI por la Corona Española para acoger a la población indígena^x. Liderados por Quintín Lame, los indígenas lograron defender y recuperar algunos resguardos hasta que su líder cayó preso en 1915. La persecución contra el movimiento arreció y en 1916 se produjo la masacre de Inzá, que obligó al movimiento a refugiarse en Natagaima, sur del Tolima, donde fundaron, el Supremo Consejo de Indias (Molano, 2014).

La lucha por la tierra también estuvo en el origen de otro de los movimientos armados que marcarían la historia política colombiana hasta nuestros días. Desde los años cincuenta se produjeron enfrentamientos en la Cordillera Central entre grupos de campesinos colonos y propietarios de grandes haciendas que expandían sus dominios de la mano de la bonanza cafetera. Los terratenientes iban subsumiendo tanto a los pequeños propietarios como a las tierras que habían sido declaradas por el Estado como “baldías”. En este escenario, los trabajadores despojados de sus tierras no tuvieron otra



opción que convertirse en aparceros, a la vez que muchos indígenas tuvieron que abandonar su resguardo para trabajar en las haciendas. La políticas gubernamentales en relación a la adjudicación de los baldíos antes que resolver el problema de la concentración de la propiedad reafirmaron la *dicotomía latifundio-minifundio* ya existente en el país (Fajardo, 1983). Los continuos atropellos de la institucionalidad colombiana y los choques con los hacendados, respaldados por las fuerzas oficiales y grupos de civiles armados, obligaron a comunidades enteras de campesinos a emprender procesos migratorios y a convertirse en arrendatarios. Algunos grupos que no estaban dispuestos a aceptar este régimen excluyente conformaron movimientos armados de lucha por la tierra. Fueron estas las condiciones que dieron origen en el año 1964 a las FARC-EP y al ELN, grupos insurgentes que combinando formas de lucha y apoyándose en fuerzas muy heterogéneas, buscaron la transformación de este orden social imperante (Molano, 2000).

Comenzó entonces un conflicto armado abierto entre el Estado colombiano y las fuerzas guerrilleras. Aunque la confrontación ha atravesado por distintas fases, en su desarrollo ha conservado las causas históricas, económicas, sociales y políticas que la generaron: la estructura desigual de la posesión de la tierra y el modelo político excluyente.^{xi}

En el panorama político y económico colombiano saltan a la vista dos grandes vacíos: el de una Reforma Agraria y el de la existencia de un movimiento de oposición a esta estructura, dicha reforma ha sido imposible por una razón evidente: el Congreso lo manejan aún hoy grandes terratenientes. Entre 1936 y 1953 las iniciativas reformistas fueron liquidadas por una astuta combinación de entramamiento burocrático y violencia armada. La reforma de los años sesenta -impuesta por la Alianza para el Progreso- fue burlada por un acuerdo bipartidista, una represión brutal contra los campesinos y un impulso a la colonización dirigida o espontánea de nuestras selvas, debo decir que la violencia ha sido una de las herramientas más idóneas para impedir la reforma agraria, violencia ejercida por grupos armados al servicio de los terratenientes y de algunos gobiernos. Desde los años sesenta se ha cooptado, comprado o asesinado toda oposición civil y democrática, obligándola a tomar el camino del monte. (Molano, 2000a)

Paralelamente la izquierda no armada intentó reorganizarse y diseñar un proyecto político alternativo, mientras sorteaba la violencia y la estigmatización proveniente desde



los sectores oficiales quienes no desaprovechaban oportunidad para asociarla con el movimiento armado y, de esa manera, poder terminar de justificar su persecución. Pero además de esta división palmaria entre quienes habían tomado la opción armada y quienes mantenían su actividad política dentro de los precarios canales brindados por la institucionalidad, la izquierda democrática arrastró en su interior otras fracturas que, unidas a la violencia política, no le permitieron al país sumarse a la tendencia general de la región.

5. LA LABORIOSA BÚSQUEDA DE LA UNIDAD

Conseguir la unidad de las fuerzas sociales progresistas ha sido uno de los retos pendientes de la izquierda colombiana. A pesar de que fuerzas históricas como el Partido Comunista Colombiano, constituido en 1930, han tenido como prioritarias sus políticas de alianzas y han impulsado diversos proyectos unitarios, pocos han logrado cristalizarse y sobre todo sostenerse en el tiempo. Para encontrar algunos de los antecedentes hay que volver la mirada hasta la segunda mitad de los años 40, cuando con motivo del frente por las libertades que surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial, distintos sectores de la izquierda social trabajaron en un espacio conocido como el Frente Popular, encargado de coordinar la lucha antifascista, desarrollando una propaganda activa contra el nazismo, denunciando sus crímenes y prestando ayuda a los inmigrantes europeos, judíos y españoles principalmente. Estos procesos unitarios consolidaron el proyecto de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC)^{xii}, avance que permitió cohesionar al movimiento obrero en una plataforma nacional, convirtiéndolo por primera vez en la historia del país en un sujeto obrero colectivo.

Otro de los sucesos determinantes para el campo progresista colombiano fue la creación del Frente Nacional (1958-1974)^{xiii}, acuerdo que institucionalizó la exclusión de la arena política de todas las tendencias distintas a los dos partidos tradicionales. El acuerdo también generó una importante fractura interna en el Partido Liberal, que provocó que una vertiente mayoritaria se pusiera del lado del régimen bipartidista, mientras que un grupo más reducido pasó a conformar el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), agrupando a sectores liberales de izquierda herederos de las luchas agrarias de 1945.



En la dispersión de la izquierda colombiana también influyeron episodios como la Revolución China y la Revolución Cubana, que redundaron en la creación de distintos grupos de izquierda que guiaban su accionar político de acuerdo con lealtades internacionales más que fundamentados en un análisis concreto del contexto nacional. Entre los intentos de cohesión más notables se pueden citar el Frente Unido en 1965, liderado por Camilo Torres, sacerdote de la corriente de la Teología de la Liberación, la Alianza Nacional Popular (ANAPO) en 1971, o la Unión Nacional de Oposición (UNO) en 1973, que logró reunir al Movimiento Obrero Independiente Revolucionario (MOIR), al PCC y al Movimiento Amplio Colombiano (MAC). Estas experiencias lograron una unidad de acción que desembocaría en el emblemático paro cívico nacional de 1977. Para inicio de los años ochenta, se creó alrededor de la Revista Alternativa el espacio que se llamó Firmes como un movimiento de orientación socialista con cierto arraigo nacional. En 1985 surgió uno de los proyectos más recordados: la Unión Patriótica, que a pesar de la cruenta persecución de la que ya hemos dado algunos detalles, alcanzó a participar con buenos resultados en las campañas electorales de los años 1986 y 1990. Pero la violencia sistemática a la que fue sometido impidió su afianzamiento como experiencia de unidad de la izquierda colombiana.

Para 1991, las fuerzas sociales se encontraron ante el escenario de los Diálogos de Paz entre el Estado Colombiano en cabeza de César Gaviria y varios movimientos insurgentes: el Movimiento 19 de Abril (M19), el Ejército Popular de Liberación Nacional (EPL), el Movimiento Quintín Lame, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y la Corriente de Renovación Socialista (CRS). El acuerdo dio como resultado la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que terminaría por proclamar la nueva constitución el día 4 de julio de 1991. Esta carta política sustituyó a la conservadora Constitución de 1886 y supuso un avance significativo en los derechos fundamentales para los colombianos, aunque incluyó algunos aspectos que beneficiaron la adaptación del modelo económico neoliberal naciente en aquellos años.

La oportunidad que ofrecía la Asamblea Nacional Constituyente para que la izquierda presentara un proyecto unitario no pudo concretarse en la práctica. El M19, que se había



posicionado como la fuerza que encarnaba el clamor democrático, presentó su propuesta, hecho que obligó a otros movimientos como A Luchar, el Frente Popular y el Partido Comunista a diseñar listas propias y lanzar una campaña por separado.

Para 1999, durante el IV Congreso de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) se crea el Frente Social y Político como estructura pensada para hacer realidad la unidad del movimiento social y político de la izquierda colombiana. La iniciativa surgió en un contexto especial, ya que coincidió con el momento en el que las políticas neoliberales dejaban ver sus peores consecuencias y, al mismo tiempo, pudo nutrirse de las experiencias transformadoras que ya comenzaban a concretarse en otras partes de Latinoamérica. En el 2003, producto de las diferencias dentro del Frente Social y Político, surge el Polo Democrático Independiente, que en 2006 se convertirá en el Polo Democrático Alternativo. Esta experiencia unitaria le permitió a la izquierda obtener sus mejores resultados electorales de los últimos años; fue en las elecciones presidenciales del año 2006 donde su candidato Carlos Gaviria superó los 2 millones seiscientos mil votos, ocupando el segundo lugar detrás de Álvaro Uribe Vélez. Representantes de esta formación política han conseguido llegar a la alcaldía de Bogotá en tres periodos consecutivos desde 2004. También se debe resaltar la importante labor que ha cumplido el Polo Democrático Alternativo como oposición en los dos mandatos de Álvaro Uribe Vélez, periodo que estuvo marcado por los vínculos de las Fuerzas Militares con el paramilitarismo^{xiv} y por la radicalización del discurso militarista de la extrema derecha.

Recientemente, han surgido en el panorama social colombiano otras expresiones políticas, como la del movimiento estudiantil, agrupado desde 2011 en la Mesa Amplía Nacional Estudiantil (MANE), el movimiento campesino, que recobró protagonismo con el Paro Nacional Agrario de 2013, la Minga Social Indígena del 2013 y las recientes movilizaciones de los indígenas del Cauca, que mantienen sus reclamos por el territorio, oponiéndose al ingreso de las transnacionales y a la implementación del régimen de monocultivos como el de la caña de azúcar. Asimismo, ha aparecido un amplio movimiento social y de opinión en respaldo a los Diálogos de Paz que se desarrollan en La Habana desde 2012 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP.

A pesar de la importante labor que el Polo Democrático Alternativo ha desarrollado en



los últimos diez años, hoy parece haber sido sobrepasado en su misión de encauzar las expresiones democráticas y de descontento social latentes en el país. Quizás esto pueda explicar el surgimiento de otras manifestaciones en el espectro de la izquierda, como la Marcha Patriótica y el Movimiento Progresista que, sumados a la restitución de la personería jurídica de la Unión Patriótica, vuelven a presentar un complejo panorama para el proyecto unitario, imprescindible en el salto de la oposición a alternativa real de gobierno. Si la unidad ha sido uno de los retos históricamente pendientes de la izquierda colombiana, los avances en los Diálogos de Paz han hecho aflorar otra cuestión que puede ser incluso más urgente, que tiene que ver con la posibilidad de que los movimientos o partidos políticos que resulten de la eventual firma de un acuerdo de paz puedan sumarse a los futuros proyectos de convergencia.

6. LA NECESIDAD DE LA PAZ Y LA CONSTRUCCIÓN DEL FRENTE AMPLIO COMO ALTERNATIVA DE PODER

Las Conversaciones de Paz tienen como principal objetivo encontrar una salida civilista al conflicto armado que sufre el país hace más de medio siglo. Se trata de un cambio radical del enfoque militarista dado por anteriores gobiernos al problema, especialmente el de Álvaro Uribe Vélez, quien ciñó toda la cuestión a una simple guerra entre fuerzas del Estado y grupos de terroristas. La diferencia radica fundamentalmente en que ahora es posible abordar las causas objetivas de la confrontación, discutir de manera abierta sobre su origen y reconocer sus consecuencias, con el objetivo primordial de superar esta trágica etapa histórica y de garantizar a las próximas generaciones de colombianos que los sucesos violentos no se repetirán. El reconocimiento del conflicto y la apertura del diálogo suponen un salto cualitativo, puesto que transmiten a la sociedad colombiana la idea de que “la comunicación es capaz de resolver con razones las perturbaciones o los desacuerdos que se hayan originado en una comunidad, siempre sobre la base de los conceptos de verdad y justicia” (Habermas, 1987).

La izquierda debería replicar internamente este principio dialógico entre sus distintas facciones, entendiendo que es absolutamente natural que en los procesos unitarios existan diferencias de criterio. Lo trascendental es poner en el centro del debate los



problemas gruesos del país, que son la necesidad de alcanzar la paz y la defensa de los intereses de las mayorías, asumiendo que las contradicciones internas deben ser abordadas con una disposición constructiva que permita tener siempre a la vista las contradicciones principales representadas por el modelo capitalista impuesto por la derecha y las élites colombianas.

Se trata, pues, de un reto de una dificultad mayúscula, pero que no puede ser considerado imposible para formaciones que han logrado superar otros desafíos como las propias campañas de eliminación física implementadas por el establecimiento. De modo que los anhelos de paz que hoy recorren el país deben corresponderse con proyectos efectivos de cambio en las estructuras sociales del país que impliquen una necesaria distribución de la propiedad de la tierra, garantías para el ejercicio de la participación política y la no repetición de los crímenes cometidos en el pasado. Pero también se precisa de una transformación en la manera de gestionar las diferencias dentro de las propias formaciones de izquierda. Solo así Colombia podrá sumarse a la tendencia regional y de paso restablecer los vínculos con sus vecinos, dejando de ser visto como el foco de desestabilización de la región.

Pero, por otro lado, la ausencia de conflicto armado y la ejecución de las reformas estructurales que requiere el país se pueden traducir en importantes beneficios para la economía colombiana. No solo porque se reducirían los costos del conflicto, que alcanzan los 0,5 porcentuales del PIB, sino porque se removerían muchos obstáculos que impiden el desarrollo económico y social de la nación. Este nuevo panorama debe ser interpretado por la izquierda como una oportunidad para diseñar un proyecto político y económico alternativo al neoliberal. El modelo alternativo debería incluir aspectos como la sostenibilidad ambiental, que suponga el abandono de modelo extractivista que atenta contra el entorno natural, el retorno de los desplazados y exiliados a sus territorios, el reconocimiento de las víctimas del conflicto, la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, la recuperación de los bienes públicos y la democratización de los medios de comunicación.

La idea que ha cobrado fuerza en el último tiempo es que todos los sectores sociales y organizaciones que desde distintas sensibilidades se han manifestado en favor de la paz y



contra los efectos del modelo neoliberal puedan confluír en un Frente Amplio que le permita a la izquierda afrontar de manera unitaria el proceso de ratificación de los Acuerdos de Paz, bien sea bajo la figura de Referendum o de Constituyente. El Frente Amplio evitaría que se repitiera el escenario de la Constituyente de 1991, donde las fuerzas de izquierda, aunque generaron un gran entusiasmo, terminaron siendo víctimas del fraccionamiento, situación que le otorgó al bipartidismo la posibilidad de mantener el monopolio de las instituciones que ostenta hasta hoy.

7. CONCLUSIONES

Las experiencias recientes de la izquierda latinoamericana muestran que la participación unificada en la lucha política se convierte en un elemento determinante en la aspiración de acceder a las instancias de gobierno nacionales. También estos procesos ofrecen evidencias de cómo algunas fuerzas políticas tras una largo periodo de lucha armada han conseguido integrarse exitosamente en movimientos democráticos en donde se comprometieron a asumir las reglas del sistema y a los que enriquecieron con sus análisis políticos y su experiencia revolucionaria. Casos como el del FMLN en El Salvador o el propio Frente Amplio en Uruguay pueden servir de referencia para la izquierda colombiana ante la posibilidad cada vez más verosímil de que los Diálogos de Paz que se desarrollan en La Habana-Cuba culminen con la aparición en el panorama de una nueva fuerza política que garantice la participación política de la insurgencia.

Este escenario de diálogo ha representado un avance cualitativo en la comprensión de las causas objetivas del conflicto, de la misma manera que ha transmitido a la sociedad colombiana la idea de que es posible resolver los desacuerdos ideológicos por vías civilizadas que no impliquen la eliminación de los adversarios políticos. La izquierda en su interior debería replicar este clima de diálogo con el propósito de acercar sus posiciones y establecer nuevas alianzas que incorporen las diferentes luchas populares a las parlamentarias y electorales que se desarrollan en el país. La propuesta de la creación de un Frente Amplio aparece como la más adecuada para invitar a la sociedad a rodear los Diálogos, al tiempo que se convierte en un instrumento idóneo que le permita a la izquierda llegar cohesionada al escenario de ratificación de los acuerdos, ya sea el Referendum o la Asamblea Constituyente.



La consecución de la paz en Colombia es un indudable avance para la democracia colombiana y representa al mismo tiempo el fortalecimiento de las demás democracias de la región, que han visto cómo Colombia se convertía por unos años en la herramienta usada por Estados Unidos para desestabilizar los procesos de unidad continental. Dicho de otro modo, los alcances que puede tener un proyecto unitario de la izquierda colombiana pueden resultar determinantes para el futuro de la izquierda en todo el continente.



8. BIBLIOGRAFÍA

- AGUILAR, Carlos (2009): “¿Cómo y por qué del Golpe de Estado en Honduras? La sinopsis de un proceso de pacificación y democratización fallido en la región”, Revista realidad 121, Instituto Brasileño de Análisis Social y Económico.
- BORÓN, Atilio (2014): Honduras: “Baño de sangre sin fin”, Cubadebate.
- BORÓN, Atilio (2004): “La izquierda latinoamericana a comienzos del siglo XXI: nuevas realidades y urgentes desafíos” OSAL 41, Año V N° 13 enero-abril 2004.
- CEPEDA, Castro Iván (2006): “Genocidio político: el caso de la Unión Patriótica en Colombia” *Revista Cejil*, Año I, No. 2, septiembre de, pp. 101-112.
- Constitución Política de Colombia 1991, Asamblea Nacional Constituyente, Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. En línea: <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125>
- FAJARDO, Darío (1983): *Haciendas, campesinos y políticas agrarias en Colombia 1920-1980*, Editorial Oveja Negra, Bogotá-Colombia.
- FIGUEROA, Ibarra Carlos (1994): “Dictadura militar y transición democrática en Centroamérica”, Ponencia presentada en XVIII *International Congress of Latin America Studies Association*, Atlanta Georgia, Marzo 1994.
- GARCÍA, Linera Álvaro (2001): La estructura de los movimientos sociales en Bolivia, OSAL, La Paz.
- GMH. ¡Basta ya! (2013): *Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional*. En línea <http://www.elpais.com.co/elpais/archivos/bastaya.pdf>
- HABERMAS, Jürgen (1987): *Teoría de la acción comunicativa, vol. I*, Taurus, Madrid.
- HARNECKER, Marta (1991): “Frente Amplio: Los desafíos de una izquierda legal”. En colaboración con Isabel Rauber. Conversación con dirigentes del Frente Amplio de Uruguay sobre la historia del FA. Publicado en Uruguay, Editorial La República, en cuatro tomos, 1991.
- HOLGUÍN M., Alfredo (2007): *Ellos son grises, nosotros el arco iris*, Contacto editores impresores, Bogotá.



- LOZANO G., Carlos (2000): *¿Cómo hacer la paz? Reflexiones desde una posición de izquierda?* Ideas y soluciones gráficas, Bogotá.
- MEDINA, Medófilo (1980): *Historia del Partido Comunista de Colombia*, Tomo I, Centro de Estudios e Investigaciones Sociales, Bogotá.
- MOLANO, Alfredo (2000a), "Conflicto, paz e intervención internacional" Revista de Estudios Sociales N° 7 Universidad de los Andes, Bogotá. pp. 26-34.
- MOLANO, Alfredo (2000b): "El Plan Colombia y el Conflicto Armado", Texto leído ante el Parlamento Europeo. Comisión de Cooperación al Desarrollo. Bruselas, septiembre 12 de 2000.
- MOLANO, Alfredo (2014): "Pasos de animal grande", Crónicas Periódico El Espectador, Colombia.
- MENDEZ, María (1978): "Medio siglo de dictadura en Nicaragua" Revista Nueva Sociedad N° 35, Marzo-Abril 1978, pp. 84-89.
- "Paramilitarismo de Estado cometió 500 mil crímenes en Colombia", Agencia de Prensa Rural, Miércoles 5 de marzo de 2014.
- RANGEL, Alfredo (1998): *Colombia: guerra en el fin de siglo*, Tercer mundo editores, Universidad de los Andes, Bogota.
- SANTIAGO, Enrique (2011): Prólogo de *Volver a nacer*, Fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales) Valencia. Coor. Simón, Paco y Bèrnacer, Óscar.
- SEMANA (2014): "El plan colombia de la paz" En línea <http://www.elespectador.com/opinion/editorial/el-plan-colombia-de-paz-articulo-473126>
- SHARP, (2011): De la democracia a la dictadura, The Albert Einstein Institution, En línea <http://www.aeinstein.org/wp-content/uploads/2013/09/DelaDict.pdf>
- VÁSQUEZ, Álvaro (2007): "La unidad y la política de alianzas de la izquierda colombiana", en *Ellos son grises, nosotros el arco iris. Lo que piensa la izquierda colombiana en el contexto del surgimiento del PDA* HOLGUÍN Alfredo, Contacto editores impresores, Bogotá.



CITAS

- i Como el caso de los movimientos sociales en Brasil, que tras el golpe militar de 1964 propinado al presidente João Goulart y la fuerte represión de los años siguientes tuvieron que esperar hasta 1973 y 1974 durante los mandatos de Garrastazú Médici y de Ernesto Geisel para ver el resurgir de las luchas sociales. Fue en estos años en los que la figura de Lula Da Silva empezó a ser conocida en el movimiento sindical. Pero será hasta el último gobierno militar de Joao Batista Figueiredo (1979-1985) cuando se consolide la propuesta de fundar el Partido de los Trabajadores PT (RAMOS, 2012).
- ii Desde su fundación en 1971 el Frente Amplio se ha constituido como la experiencia unitaria de izquierda más prolongada de América Latina. Conformado por distintas corrientes, desde los Tupamaros, el Partido Comunista, sectores progresistas e incluso algunos sectores liberales, sobrevivió a la cruenta represión de la dictadura militar (1973-1985), se convirtió en alternativa de poder local desde los años noventa y a partir de 2004 conserva el gobierno del país.
- iii En Nicaragua y El Salvador las dictaduras militares surgen combinando rasgos de las oligarquías locales, pero su dominación no solo es la expresión de una correlación de fuerzas internas, sino que está determinada por la activa influencia de EE.UU. que requería de gobiernos afines a sus intereses en el periodo de su afianzamiento como potencia hegemónica tras la Segunda Guerra Mundial (Figueroa, 1994).
- iv Desde el golpe de estado de 2009, **Honduras se convirtió en el país con la mayor tasa de homicidios de las Américas** y, probablemente, del mundo: 90 por cada 100 mil habitantes, es decir, casi tres veces superior al promedio de toda la región. La Honduras ocupada por los yankees lleva asesinados 7 periodistas en lo que va de 2014 y 47 desde 2003, la mayoría de los cuales fueron perpetrados después del golpe de 2009. **El objetivo estratégico del imperio hoy es “hondureñizar” América Latina y el Caribe y re-imponer un estatuto neocolonial regresando a nuestros países a la condición existente el día 31 de diciembre de 1958**, en la víspera de la [Revolución Cubana](#). ¡A no dejarse engañar. En guardia y, como decía Chávez, “rodilla en tierra”! (Borón, 2014)
- v La teoría del “Golpe de estado blando o suave” fue diseñada por el politólogo estadounidense Gene Sharp en su ensayo “De la democracia a la dictadura” (2011) y plantea la combinación de la violencia armada con otro tipo de acciones de desestabilización, como el boicot económico, la manipulación informativa, la guerra psicológica y el aislamiento y la presión internacional. A través de estos métodos se crea un clima de ingobernabilidad y de malestar social; una vez dadas estas condiciones se pasa a exigir la renuncia del presidente mientras se mantiene la agitación en los medios de comunicación y en las calles. El objetivo último es producir una fractura institucional que sea aprovechada por otras fuerzas políticas y militares para tomar las instituciones. Parte de esta estrategia fue probada con éxito en Honduras y Paraguay y es la que implementa la oposición venezolana desde comienzos de 2014.
- vi Colombia se ha caracterizado por ser el país de la región que más ayuda militar ha recibido en los últimos años por parte de EE.UU. De acuerdo con cifras oficiales entre los años 2000 y 2014 EE.UU. proporcionó unos US\$7.500 millones que fueron destinados a la denominada guerra contra el terrorismo y el narcotráfico. (Semana, 2014)
- vii La Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Confederación Sindical Internacional (CIS) y las organizaciones sindicales colombianas representadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) han presentado informes sucesivos en los que señalan a Colombia como uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio de la actividad sindical.
- viii El Partido Comunista Colombiano (PCC) es la formación mayoritaria dentro de la composición de la UP. Desde hace décadas se practica una feroz represión contra sus militantes y líderes, que en la historia más reciente se remonta a finales de la década de 1940. El hostigamiento oficial ejecutado en aquella etapa



tenía como trasfondo ideológico el anticomunismo acuñado bajo la “guerra fría”, que acusaba a las organizaciones de izquierda de ser “embajadoras de la amenaza soviética”. Pero, además, estas campañas tenían su apoyo en el anticomunismo local de raíz clerical, que se practicaba desde la década de 1930 a través de organismos como el Secretariado de la Acción Popular Colombiana, cuya función era “secundar por todos los medios posibles la lucha anticomunista” (Medina, 1980, 326). La práctica constante de esa propaganda ideológica, que presenta a los comunistas como una amenaza para la sociedad, ha derivado en un estado de estigmatización pública que valida cualquier agresión en su contra. La dinámica de acusaciones, el uso de un lenguaje denigrante y las persecuciones resultantes de estas prácticas, han permitido que la ola ininterrumpida de crímenes contra los militantes de izquierda se haya incorporado como un hecho habitual de la vida política del país, al punto de no suscitar ya asombro ni reacciones en las instituciones y líderes de opinión. (Cepeda, 2006)

- ix Las investigaciones sobre este suceso aseguran que más de 5 mil personas que pertenecieron a la UP fueron víctimas de múltiples violaciones de derechos humanos, asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos y exilios, situación por la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió en 1997 la demanda interpuesta por la Corporación Reiniciar junto con la Comisión Colombiana de Juristas, sin que hasta el día de hoy exista solución amistosa para este caso sin precedentes. En 2002 se le retiró la personería jurídica a la UP, pero gracias a la perseverancia de los sobrevivientes de la colectividad les fue reintegrada por el Consejo de Estado en mayo de 2014, mediante una decisión en la que se ordenó también que el restablecimiento del estatuto legal del movimiento se mantenga hasta las elecciones legislativas del año 2018. En diciembre de 2012, magistrados del sistema de Justicia y Paz establecieron que los asesinatos que cometieron paramilitares y miembros de la Fuerza Pública en contra de la Unión Patriótica constituyen un genocidio de carácter político. (Cepeda, 2006)

* Iván Cepeda es Senador de la República por el Polo Democrático Alternativo (PDA), partido político en el que se agruparon distintos sectores de la izquierda colombiana tras la persecución desencadenada desde la segunda mitad de los años ochentas contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano (PCC).

- x Los resguardos habían servido en la época colonial para obligar a los indígenas a pagar tributos a la Corona Española, pero una vez obtenida la independencia se preservaron y se convirtieron en la institución socio-política con la que se reconocía a las comunidades amerindias un título de propiedad inalienable, colectiva y comunitaria sobre la tierra. La figura del resguardo se preserva hasta la actualidad y permite también que las comunidades que lo habitan disfruten de un estatuto especial autónomo con pautas y tradiciones culturales propias. Varios artículos de la Constitución Política la contemplan. Entre ellos el ARTICULO 329: “La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y su delimitación se hará por el Gobierno Nacional, con participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable. La ley definirá las relaciones y la coordinación de estas entidades con aquellas de las cuales formen parte”. (CPC, 1991, con las reformas de 2001).
- xi “El Ejército mató varios estudiantes y el gobierno, ni corto ni perezoso, resolvió culpar al comunismo internacional, declaró fuera de la ley al Partido Comunista y envió tropas a reprimir al movimiento agrarista que desde los años treinta luchaba por una más equilibrada distribución de la tierra en el Sumapaz y en el oriente del Tolima. Fue una guerra cruenta y cobarde. Los EE.UU. jugaron un destacado papel al dirigir las operaciones aéreas y el bombardeo a las posiciones campesinas. Se ensayó aquí por primera vez la bomba de napalm y los nuevos esquemas de colaboración en la tarea contrainsurgente del ejército americano. El resultado neto fue la reorganización en guerrillas móviles de los campesinos y el repliegue de sus fuerzas y de sus familias hacia zonas selváticas. De Villarrica y del Sumapaz salieron huyendo, protegidos por precarias fuerzas guerrilleras, cientos de familias hacia el pie de monte de la



cordillera oriental, hacia las cabeceras de los ríos Guayabero y Caguán, hacia los páramos del nevado del Huila. De estos desplazamientos nacen tentativas de reorganización social y de autonomía administrativa que los campesinos trataron de crear en las regiones donde se refugiaron. El gobierno leyó en ese ensayo ingenuo pero altivo, la formación de Repúblicas independientes. En el fondo, el intento de los rebeldes se reducía a fortalecer localmente economías campesinas en áreas baldías, pero con independencia de los partidos políticos. Esto fue, sin duda, lo que desató de nuevo las furias del sistema y la declaración de una nueva guerra contra las organizaciones campesinas, con la estrecha colaboración de los EE.UU., a cuyo cargo estuvo la formulación del plan operativo de invasión y aniquilamiento de las fuerzas campesinas, llamado Plan Lasso. Naturalmente, las invasiones se llevaron a cabo y el Ejército Nacional pudo dar parte de victoria. Pero el resultado neto fue de nuevo la reorganización campesina, esta vez bajo la forma de un ejército de gran movilidad que se asentó en las regiones donde se desarrolló, desde entonces, un agresivo proceso de colonización. Allí es donde nacen y se fortalecen las FARC. No soslayaría el papel que el Partido Comunista jugó en la orientación ideológica y política de esta fuerza esencialmente campesina y de claras connotaciones liberacionistas. Pero creo firmemente que los verdaderos factores que generaron la organización militar fueron el ataque del Ejército Nacional y, sobre todo, la estrategia de tierra arrasada que utilizó como aplicación del concepto de "enemigo interno". (Molano, 2000)

- xii La expulsión de los comunistas de la CTC dio lugar a la creación en 1964 de la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC); tras este suceso fue necesario esperar hasta 1986 a que surgiera un nuevo proceso unitario que culminó con la creación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Esta ha sido la experiencia unitaria de mayor alcance construida desde sectores obreros, tanto en el escenario político como en la lucha gremial contra el modelo neoliberal. (Vásquez, 2007)
- xiii El Frente Nacional fue un acuerdo político firmado en Benidorm-España por representantes del Partido Conservador y el Partido Liberal por medio del cual las dos formaciones pactaron turnarse la dirección del país en periodos de cuatro años. El acuerdo además establecía el reparto de los escaños parlamentarios y de todos los niveles de gobierno entre las dos fuerzas políticas, excluyendo de esa manera al resto del espectro político del país. El bipartidismo institucionalizado duró desde 1958 hasta 1974.
- xiv El paramilitarismo fue un proyecto diseñado por el Estado colombiano como parte de la guerra sucia contra todos los sectores de izquierda y el movimiento social colombiano. Aunque teóricos de la derecha colombiana han intentado desligar el fenómeno paramilitar de la dirección estatal (Rangel, 1998), en los procesos que se adelantan en el marco de la Ley de Justicia y Paz promulgada en 2005, los propios líderes paramilitares han confesado que cometieron más de 40.000 crímenes que afectaron a 51.000 personas, entre ellos cerca de mil masacres, 25.000 asesinatos, más de 3.500 desapariciones forzadas, que involucran, entre otros, a más de 1.400 agentes del Estado. Diez años después, solo 20 de los más de 4.000 postulados a la Ley de Justicia y Paz han sido condenados. (Prensa Rural, 2014) Pese a lo anterior, son innegables los avances del sistema en materia de contribuciones a la verdad: 39.546 hechos confesados, 12.869 casos compulsados a la justicia ordinaria, de los cuales 1.124 han ido a la Corte Suprema de Justicia para el juzgamiento de políticos relacionados con el paramilitarismo, y 3.929 fosas exhumadas con 4.809 cadáveres encontrados a diciembre del 2012. Estas cifras permiten tener una idea de la gigantesca tarea que hace falta. Aún así las sentencias son muy pocas para casi 40.000 hechos delictivos confesados. (Informe GMH ¡BASTA YA!, 2013)